



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

RESOLUCIÓN NÚMERO.- 322 (TRESCIENTOS VEINTIDÓS).

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a **13 trece de septiembre de 2023 dos mil veintitrés.**

Vistos para resolver los autos del Toca **320/2023** formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia del **28 veintiocho de abril de 2023 dos mil veintitrés**, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro del expediente **322/2022**, relativo al **Juicio Sumario sobre Cancelación de Pensión Alimenticia**, promovido por ***** ***, en contra de *****.

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- Mediante auto del 8 ocho de abril de 2022 dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo Tamaulipas, se tiene a ***** ***, promovido **Juicio Sumario sobre Cancelación de de Pensión Alimenticia**, en **contra de *******, de quien reclamó las prestaciones que enseguida se transcriben:

(SIC)“PRIMERO.- LA DECLARACIÓN JUDICIAL QUE ESTABLEZCA LA CANCELACIÓN DEL (50%) CINCUENTA POR

CIENTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA A LA QUE FUI CONDENADO EN LA SENTENCIA DE FECHA (17) DIECISIETE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993), RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE DIVORCIO NECESARIO.

SEGUNDO. LA DECLARACIÓN JUDICIAL QUE CONDENE A LA AHORA DEMANDADA SEÑORA *****
***** e ***** AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTA JUDICIALES.”(SIC)

Fundándose en que contrajo matrimonio con la demandada ***** el 2 dos de octubre de 1976 mil novecientos setenta y seis, procreando a dos hijas *****
*****, quienes ahora son mayores de edad y profesionistas, que el juzgador dentro del expediente número 718/1991 ordenó el embargo del 50% cincuenta por ciento de su salario y demás prestaciones, en favor de la señora ***** y sus hijas, que las circunstancias por las que se le condenó a los alimentos han cambiado pues la demandada ya no es su esposa y por más de 15 quince años le ha proporcionado los alimentos cuando sus hijas ya habían terminado sus estudios universitarios, y hasta la fecha le están haciendo ese descuento, que a su ex-esposa le sigue dando el servicio médico (IMSS), y que ya no tiene la obligación de darle alimentos.

La demandada contestó que promovió el Divorcio Necesario por la causal de adulterio, en contra de *****



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

***** expediente número 718/1991, y en el
resolutivo cuarto de la sentencia se le condenó al pago de
alimentos definitivos en su favor como cónyuge inocente, y
que las circunstancias no han cambiado porque no se ha
vuelto a casar, ni ha tenido ni tiene empleo debido a su
discapacidad, que a la fecha ha desarrollado
***** y de rodilla,
*****, con riesgo aumentado a la fractura
en cadera que su padecimiento es crónico degenerativo, no
es curable y solo es controlable, de ahí su discapacidad
física permanente y necesita ser asistida por otra persona
por lo que el embargo del 50% cincuenta por ciento debe
continuar por la misma cantidad.

Establecida la litis, se continuó con la substanciación
del juicio por sus demás trámites legales y el **28
veintiocho de abril de 2023 dos mil veintitrés**, el juez
del conocimiento dictó la sentencia definitiva
correspondiente, la cual concluyó con los siguientes puntos
resolutivos:

*(SIC) "PRIMERO:- Ha procedido parcialmente el presente JUICIO
SUMARIO CIVIL SOBRE CANCELACIÓN DE ALIMENTOS
DEFINITIVOS, promovido por el ciudadano *****
contra de las ciudadanas *****e
*****, y no así por lo que respecta a la ciudadana
*****, por los razonamientos expuestos en el
considerando cuarto de ésta sentencia.*

**SEGUNDO:- Se DECRETA LA CANCELACIÓN DE LA PENSIÓN
ALIMENTICIA FIJADA a favor de *****e**

***** , quienes eran representadas por su madre
 ***** , otorgada por el actor ***** .

TERCERO:- Se deja sin efectos el 50% (cincuenta por ciento) que se le venía descontando al señor ***** en su fuente laboral, decretándose como nueva medida de alimentos definitivos para la ciudadana ***** , el **17% (diecisiete por ciento)**, del salario y demás prestaciones que percibe el ciudadano ***** , cantidad del porcentaje sea entregada a la ciudadana ***** , a fin de satisfacer sus necesidades alimentarias, lo anterior una vez hechas las deducciones de ley.

CUARTO:- En virtud de que ninguna de las partes actuaron con temeridad o mala fe no se hace especial condena al pago de costas procesales del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Tamaulipas.

QUINTO: Notifíquese a las partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), una vez concluido el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado **CARLOS GERARDO PÉREZ GÓMEZ,...** (SIC)

SEGUNDO.- Notificadas las partes del fallo anterior e inconforme la parte demandada, interpuso en su contra recurso de apelación el cual fue admitido en **efecto devolutivo**, por el Juez de Primera Instancia quien ordenó la remisión de los autos al Supremo Tribunal de Justicia donde por acuerdo plenario del **15 quince de agosto de 2023 dos mil veintitrés** se turnaron a esta Sala Colegiada para su conocimiento y resolución.



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Esta Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas es competente para conocer y decidir el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, fracciones I y I-B y 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 104 fracción I y 106 de la Constitución Política local, 20 fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación a los acuerdos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 3 tres de junio de 2008 dos mil ocho y 31 treinta y uno de marzo del 2009 dos mil nueve, publicados en el Periódico Oficial de la Entidad del 5 cinco de junio del 2008 dos mil ocho y 7 siete de abril del 2009 dos mil nueve.

SEGUNDO.- Los conceptos de agravio expuestos por la demandada ***** a través de su apoderada jurídica licenciada *****, visibles a fojas de la 8 ocho a la 11 once del presente toca, se tienen por reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren, pues no es menester la transcripción para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados del

escrito de expresión de agravios, se estudian y se les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos del pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.

Lo anterior encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Materia: Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Novena Época, Registro digital: 164,618, de rubro y texto:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

El actor ***** a través de su autorizada licenciada *****, desahogó la vista a los agravios, mediante escrito presentado el **15 quince de mayo de de 2023 dos mil veintitrés.**

TERCERO.- Enseguida se procede al estudio de las inconformidades expresadas por la apelante *****, de acuerdo a las consideraciones legales siguientes.

Los **dos agravios** expresados por la recurrente se estudian en conjunto por su estrecha relación, en ellos alegó que la sentencia violó los artículos 1, 2 y 115 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y 288 del Código Civil de la misma entidad, al fijar una pensión alimenticia inferior al mínimo que marca el último numeral, que lo fue del 17% diecisiete por ciento; que además el juzgador por error consideró que las necesidades alimenticias son aproximadamente de ***** mensuales, cuando en la propia sentencia reconoció como acreditados sus egresos por la cantidad de ***** por mes, no incluido el gasto por actividad recreativa por la suma de *****, que luego entonces, si el 17% diecisiete por ciento que se le dio para

sus alimentos equivalía aproximadamente a la cantidad de

mensuales, cantidad que no corresponde a sus necesidades. Agregó, que no está comprobado el salario real del deudor alimentario, en virtud de que se tomaron como base las copias simples de los talones de cheques; añadió, que es falso lo afirmado por el juez en el sentido de que el deudor le está proveyendo casa habitación (la cual es propiedad de sus hijas) y que también es falso que le esté dando asistencia médica del ISSSTE, pues obra constancia de no afiliación al mencionado Instituto, misma que no fue impugnada por su contraria; finalizó diciendo que el Juez al resolver no consideró todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias del obligado alimentista, ni ordenó enviar oficios a la

***** de dicha ciudad.

Los conceptos de inconformidad que anteceden son **fundados**, aunque para declararlos así deban ser suplidos en su deficiencia, por tratarse la acreedora alimentista de una persona adulta mayor, hecho que demostró con el acta de divorcio que obra ahoja 9 nueve del expediente principal, primer tomo, exhibida por el actor como documento fundatorio de su acción, de la que se desprende que en la fecha de inscripción de la disolución del vínculo



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

matrimonial 14 catorce de junio de 2021 dos mil veintiuno,
la señora ***** tenía
*****, actualizándose así lo
previsto por los artículos 3, 5, apartado I, incisos: a), e) y g);
apartado II; y apartado III incisos a), b) y c); 6, 8 y 27 de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el
Estado de Tamaulipas, a saber:

“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ...

VIII.- Personas Adultas Mayores.- A aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en el Estado; contemplándose en diferentes condiciones.”

“Artículo 5.- Las personas adultas mayores tienen, entre otros, los siguientes derechos:

I- A la dignidad:

a) .- Vivir con dignidad y seguridad;...

e) .- Recibir protección por parte de su familia, del Estado y sociedad;...

g) .- Vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos.

II. -A la certeza jurídica:

III. - A la salud y alimentación:

a) .- Tener acceso a los satisfactores necesarios, para su atención integral;

b) .- Tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

c) .- Recibir atención preferencial, orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene.”

“ARTÍCULO 6.- La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y permanente, deberá hacerse cargo de cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella y proporcionándoles los elementos necesarios para su atención integral.”

“ARTÍCULO 8.- La familia tendrá las siguientes obligaciones:

I.- Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil vigente en la Entidad;

II.- Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo;

III.- Conocer los derechos de las personas adultas mayores, previstos en la presente ley, así como los que se encuentran contemplados en la Constitución Política del Estado y demás ordenamientos para su debida observancia; “y

IV.- Evitar que alguno de sus integrantes realice cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia o los que pongan en riesgo a la persona adulta mayor, así como sus bienes y derechos.”

“ARTÍCULO 27.- Toda persona que tenga conocimiento de que una persona adulta mayor se encuentre en situación de riesgo o desamparo podrá pedir la intervención de las autoridades competentes para que se apliquen de inmediato las medidas necesarias para su protección y atención.”

En el mismo sentido deben atenderse los lineamientos del Protocolo de Protección de Personas Adultas Mayores en el Ámbito Judicial, al establecer en el apartado que designó “PROTOCOLO”, punto I, lo siguiente:

“1. Basta un indicio para estimar la presencia de una persona adulta mayor, salvo prueba en contrario. En ese sentido, siempre se deben aplicar medidas de protección, sólo que, según el grado de vulnerabilidad, será la potencia, mínima, o máxima, de los medios de protección que se apliquen en el procedimiento, buscando un equilibrio entre ambas partes. ...”

Protección a los adultos mayores que tambien encontramos en el artículo 1 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer:**



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

"Artículo 1o. *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y*

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, Investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

En el mismo sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada por México en 1948, la cual forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, en sus artículos 3 y 7 dispone que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; y son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, y contra toda discriminación, por lo anterior, se actualiza el deber del

Estado de establecer una decisión legal eficaz, que permita impartir justicia a personas que merecen especial tutela, como lo son los adultos mayores.

Principios torales de los que se desprende, en lo conducente, que toda autoridad en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y que queda prohibida toda discriminación por la edad, y que el Estado tiene por objeto proteger a las personas adultas mayores para proporcionarles una mejor calidad de vida, que vivan con dignidad y seguridad, que se respete su integridad física psicoemocional, que vivan en entornos seguros dignos y decorosos, en el seno de su familia y tengan libertad de expresar su opinión y participar en el ámbito familiar. En tanto que a la familia se le impone la obligación de fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente y evitar que cualquiera de sus integrantes realice cualquier acto de discriminación, como el aislamiento que ponga en riesgo al adulto mayor.

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del CENTRO Auxiliar de la Cuarta Región, Registro digital: 2016662, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

Materias(s): Común, Civil. Tesis: (IV Región)2o. J/8 (10a.).

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 1872.

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS.

En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun

cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente.”

Es orientador el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Registro digital: 2003811. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: I.5o.C.5 K (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, página 1226., de rubro y textos siguiente:

“ADULTOS MAYORES. EL JUZGADOR DEBE TENER EN CUENTA LA CONSIDERACIÓN ESPECIAL HACIA LOS DERECHOS DE AQUÉLLOS, GARANTIZADA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN DIVERSAS RECOMENDACIONES Y TRATADOS CELEBRADOS ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES. *La consideración especial hacia los derechos de las personas mayores ha sido garantizada no sólo en la legislación local y federal del país, sino además, en diversas recomendaciones y tratados celebrados ante organismos internacionales. Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de las personas de la tercera edad están basados en las premisas fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De acuerdo con lo expuesto, debe decirse que si a alguna de las partes en el juicio le corresponde la condición de persona adulta mayor, el juzgador debe analizar las disposiciones legales aplicables al caso en seguimiento de los principios establecidos en los ordenamientos mencionados, así como en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley Fundamental del país y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al interesado.*



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

Por lo anterior es por lo que, aun y cuando estamos en una acción sobre cancelación de alimentos, en la que la demandada no se reconvino al actor el aumento de dicha prestación, esto no es obstáculo para analizar las actuales necesidades de la acreedora alimentista, al considerar que la suplencia de la queja opera en su favor, lo que nos permite analizar el proceder del juzgador en la sentencia recurrida, en los términos que más adelante se precisan.

Previamente se debe decir a la inconforme que del artículo 288 del Código Civil se desprenden dos parámetros para fijar el porcentaje de la pensión alimenticia: el general cualitativo, que atiende al principio de proporcionalidad, y el cuantitativo que es el aritmético de mínimos y máximos; el primero atiende al principio de proporcionalidad, consistente en que los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del deudor alimentista y a las necesidades del acreedor alimentario, de manera que el monto de los alimentos que debe proporcionar el obligado, debe fijarse de acuerdo con las posibilidades del deudor y a las necesidades del acreedor; el segundo se refiere a que la proporción de los alimentos no podrá ser en un porcentaje inferior al 30% treinta por ciento ni mayor del 50% cincuenta por ciento del sueldo o salario del deudor alimentista, criterio matemático que no es posible atender, para no violentar la garantía de debida fundamentación y

motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio el derecho de los alimentos que es de orden público e interés social.

Cobra aplicación la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis. Registro digital: 189214. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Civil. Tesis: 1a./J. 44/2001. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Agosto de 2001, página 11. bajo la voz de:

“ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio

este derecho de orden público e interés social. Lo destacado es propio.

Retomando el agravio tenemos que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que el juzgador inicialmente tiene por acreditados los egresos de la acreedora alimentista por la cantidad de*****,

y posteriormente dice que lo es por la suma de ***** ante esa imprecisión esta Alzada analizará el estudio socioeconómico practicado a ***** , en los términos que a continuación se precisan:

Estructura familiar:

NOMBRE	EDAD	PARENTEZCO	OCUPACIÓN
*****	***** *****	Entrevistada	Al hogar
***** *	***** *****	Nieto	Músico

Egresos mensuales por concepto de servicios públicos y de alimentación:

CONCEPTO:	PRORRATEADO:	IMPORTE MENSUAL
Agua mensuales.	Entre 2 personas	***** *****
Energía eléctrica según el recibo.	Ente 2 meses y el resultado entre 2 personas.	***** *****
Gas mensuales.	Ente 2 personas	***** *****
Teléfono mensuales según el recibo.	Ente 2 personas	***** *****

Alimentación mensual.	Solo para la demandada	***** ***** ***** ***** **
Trasporte.	Una persona	***** ***** ***** ***** **
Ropa y calzado	personal	***** ***** ***** ***** **
Actividades recreativas no recibos de pago del o los centros recreativos visitados, de ahí que solo se le reconoce el 50% de lo que informó	personal	***** ***** ***** ***** **
Gastos Médicos según los comprobantes.	personal	***** ***** ***** ***** **
Empleada doméstica		***** ***** ***** ***** **
TOTAL		***** ***** ***** ***** **

Calculadas en forma aproximada las erogaciones de la acreedora, procederemos ahora a establecer la capacidad económica del obligado alimentista tomando en cuenta las prestaciones ordinarias y extraordinarias descontando unicamente los descuentos legales:

Percepciones quincenales de *****
que obtiene de la *****,

para lo cual se consideró el comprobante de pago que obra a foja 725 del expediente principal tomo II, lo anterior es así dado que la regulación será en forma aproximada:

CONCEPTO y CLAVE:	IMPORTE:
Saldo nominal 15 Días (07)	
Compensación por actuación y productividad (CA)	
Ayuda Despensa (38)	
Material didáctico (39)	
Eficiencia de trabajo (ET)	
Prima de Antigüedad (QZ)	
TOTAL	

Descuentos por quincena de la

*****:

CONCEPTO y CAVE:	IMPORTE:
Cuota Sindical (58)	***** ***** ***** *****
1L	***** ***** ***** *****
3L	***** ***** ***** *****
Seguro Colectivo de Retiro (77)	***** ***** ***** *****
Seguro de Grupo (54)	***** ***** ***** *****
Impuesto Sobre la Renta (01)	***** ***** ***** *****
2L	***** ***** ***** *****

4L	***** ***** ***** *****
Pensión Alimenticia (62)	***** ***** ***** *****
Seguro Institucional (50)	***** ***** ***** *****
TOTAL:	***** ***** ***** *****

Percepciones quincenales de ***** que
obtiene del

***** , acuyo efecto se tomó en cuenta el
comprobante de pago que obra a foja 727 del expediente
principal tomo II:

CONCEPTO:	IMPORTE:
Sueldo	***** ***** ***** ***** *****
Previsión Social	***** ***** ***** ***** *****
Compensación por Riesgo Profesional	***** ***** ***** ***** *****
Compensación por Antigüedad	***** ***** ***** ***** *****
Quinquenios	*****

	***** ***** ***** *****
Despensa	***** ***** ***** ***** *****
Ayuda de Trasporte	***** ***** ***** ***** *****
Asignación	***** ***** ***** ***** *****
Estimulo Asistencia	***** ***** ***** ***** *****
Estimulo Puntualidad	***** ***** ***** ***** *****
Estimulo Desempeño	***** ***** ***** ***** *****
Estimulo Mérito Relevante	***** ***** ***** ***** *****
Ayuda Gastos Actualización	***** ***** ***** ***** *****
TOTAL	*****

Descuentos por quincena en el ISSSTE:

CONCEPTO:	IMPORTE:
Impuesto sobre la Renta	*****
Cuota Sindical Local	***** ***** *****

	***** ***** *****
Comisión de Auxilio	***** ***** ***** ***** ***** *****
Seguro Institucional	***** ***** ***** ***** ***** *****
Seguro Colectivo de Retiro	***** ***** ***** ***** ***** *****
Pensión Alimenticia	***** ***** ***** ***** ***** *****
Fondo de Ahorro Capitalizable	***** ***** ***** ***** ***** *****
Serv. De Gastos Funerarios (NASER)	***** ***** ***** ***** ***** *****
Seguro de Res. Civil y Prof.	***** ***** ***** ***** ***** *****
Seguro de Salud	***** ***** ***** ***** ***** *****
Seguro de Salud	***** *****

	***** ***** ***** *****
Seg. Inval y Vida	***** ***** ***** ***** ***** *****
Ser. Soc. y Cult.	***** ***** ***** ***** ***** *****
Seguro de Cesantía	***** ***** ***** ***** *****
TOTAL:	***** ***** ***** ***** ***** *****

En las relatadas circunstancias tenemos que la percepciones económicas de ***** por el trabajo que desempeña en la ***** , lo es de ***** ,

cantidad que al restar los descuentos legales como lo es el impuesto sobre la renta por ***** ,

tenemos por quincena la suma de ***** ,

y por mes el monto aproximado de

*****; en tanto que a las percepciones que
obtiene el obligado alimentario del

*****, lo es por la cantidad de
*****, a
la que restando el impuesto sobre la renta de
*****,
queda por quincena el monto de

*****, y por mes nos da la suma aproximada de

*****, de ahí que al sumar los
percepciones mensuales de referencia se obtiene un total
de

***** por mes, a la que al aplicarle un descuento del
21% veintiuno por ciento por concepto de alimentos nos
arroja la cantidad aproximada de

*****; cantidad con la cual la acreedora
***** cubre sus necesidades alimenticias,
y si bien es ligeramente superior a los gastos que informó,
no pasó por alto que el alza en los precios de la canasta
básica es constante, aspecto que se hace valer de oficio en
suplencia de la queja al ser un hecho notorio que no

necesita prueba, en términos de lo estatuido por el artículo 280 de Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. En cuanto al rubro habitación se le debe decir que no hace erogación por ese concepto, pues a decir de la propia recurrente vive en casa de sus hijas, y en cuanto al servicio médico ya lo incluyó en el estudio socioeconómico que se le practicó; por lo que se considera equitativo el mencionado porcentaje, puesto que al deudor alimentista le queda el 79% setenta y nueve por ciento para satisfacer sus propias necesidades.

Otro argumento **fundado** consiste en que el juzgador en la sentencia recurrida no ordenó girar los oficios correspondientes a las instituciones donde labora el obligado alimentista ***** *****, como es a la

*****, por lo que en su oportunidad remítase el oficio correspondiente a las mencionadas instituciones.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 926 y 949 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, al haber resultado **fundados** los agravios suplidos en su deficiencia, deberá **modificarse** la resolución impugnada en su resolutive tercero, a efecto de que se imponga al actor un 21% veintiuno por ciento de su

salario y prestaciones por concepto de alimentos a favor de
 *****, y se envíen los oficios
 correspondientes a las instituciones ya mencionadas.

Ahora bien, al encontrarnos frente a una acción sobre cancelación de alimentos definitivos, lo que define su carácter de derecho de familia, y como tal, las decisiones adoptadas en forma directa o indirecta afectaría en la capacidad económica del deudor y en consecuencia al acreedor alimentario; bajo ese contexto no resulta procedente imponer condena en el pago de costas procesales; debiendo cada una de las partes sufragar los gastos en que hubiesen erogado en la tramitación ante esta Segunda Instancia.

En apoyo a lo anterior cobra aplicación por analogía el criterio de jurisprudencia, sustentado por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, Registro Número 26750, Décima Época, Plenos de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:

“GASTOS Y COSTAS. ES IMPROCEDENTE LA CONDENAS A SU PAGO EN LOS JUICIOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO FAMILIAR, E IGUALMENTE, CON EL DE MENORES DE EDAD O INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz prevé la condena al pago de gastos y costas con base en la teoría del vencimiento, al establecer que siempre será condenado el litigante que no obtuviere resolución favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes que



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

surgieren. Sin embargo, acorde con la reforma a su primer párrafo, última parte, aprobada por decreto publicado en la Gaceta Legislativa de 8 de enero de 2015, esa condena no operará y, por tanto, es improcedente en los juicios o procedimientos relacionados con el derecho familiar, y con el de menores de edad o incapaces.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 105 fracción III, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 926, 947 fracción VII, y 949 del Código de Procedimientos Civiles y se:

R E S U E L V E

PRIMERO.- Son fundados los agravios, suplidos en su deficiencia, expresados por la demandada ***** , a través de su apoderada ***** en contra de la sentencia del **28 veintiocho de abril de 2023 dos mil veintitrés**, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo Tamaulipas.

SEGUNDO.- Se **modifica** el punto resolutivo TERCERO, de la sentencia impugnada a que alude el resolutivo anterior, para que ahora quede como sigue:

“TERCERO.- Se deja sin efectos el 50% cincuenta por ciento que se le venía descontando al señor ***** en su fuente laboral, decretándose como nueva medida de alimentos definitivos para la ciudadana ***** el 21% veintiuno

*por ciento, del salario y demás prestaciones que percibe el ciudadano ***** , cantidad del porcentaje sea entregada a la ciudadana ***** , a fin de satisfacer sus necesidades alimentarias, lo anterior una vez hechas las deducciones de ley; a cuyo efecto deberán enviarse los oficios respectivos a la ******

ambos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

TERCERO.- Prevalece la sentencia en los restantes puntos resolutivos.

CUARTO.- No se hace condena en costas procesales en contra de ninguna de las partes en esta segunda instancia.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; y con testimonio de la resolución, devuélvanse los autos al juez de primer grado para los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese el Toca como asunto concluido.

Así lo resolvieron y firmaron los Ciudadanos Magistrados, **NOÉ SÁENZ SOLÍS** y **HERNÁN DE LA GARZA TAMEZ**, integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, ante la ausencia del titular de la Tercera Sala,



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER JUDICIAL
SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA
PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL - FAMILIAR

que forma parte de éste Órgano Colegiado, conforme a lo previsto por los artículos 26, párrafo segundo y 27, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo Presidente y ponente el primero de los nombrados, quienes firmaron hoy **13 trece de septiembre de 2023 dos mil veintitrés**, fecha en que se terminó de engrosar esta sentencia, ante la Licenciada Liliana Raquel Peña Cárdenas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Lic. Noé Sáenz Solís
Magistrado

Lic. Hernán de la Garza Tamez
Magistrado

Lic. Liliana Raquel Peña Cárdenas
Secretaria de Acuerdos.
Enseguida se publicó en lista del día. Conste.
L'NSS'L'LRPC.L'MVH.

El Licenciado(a) MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, Secretario Proyectista, adscrito a la PRIMERA SALA COLEGIADA CIVIL, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la resolución número 322 dictada el (MIÉRCOLES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023) por el MAGISTRADO, constante de 25 fojas útiles por ambos lados. Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110

fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: el nombre de las partes, el de sus representantes legales, tipo de padecimientos, cantidades monetarias, de terceros, edad y centros de trabajo información que se considera legalmente como confidencial y sensible por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Versión pública aprobada en la Décima Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, celebrada el 27 de noviembre de 2023.